

<https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/08/16/ecologia-social-plan-geoestrategico-y-el-escudo-triple-a/>

Por su importancia analítica e informativa, reproducimos el artículo de Resumen Latinoamericano, titulado Ecología social. Plan geoestratégico y el «Escudo Triple-A», publicado el 16 de agosto de 2026.

Ecología social. Plan geoestratégico y el «Escudo Triple-A»

By *Resumen Latinoamericano* on 16 agosto, 2026



Por: Luz Itzá Cocom Apaza de Comunicadores por Palestina, Resumen Latinoamericano, 16 de agosto de 2026.

Cómo los Acuerdos de Isaac y la red de tratados de libre comercio reconfiguran el control del agua, la energía y los minerales críticos en el Sur Global.

La firma el pasado 1 de junio en Washington de una declaración de intenciones entre el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, ha puesto en marcha una arquitectura geoeconómica que busca reconfigurar el

control de los recursos estratégicos en América Latina y África. Bajo el nombre de Acuerdos de Isaac, esta iniciativa representa la expansión del modelo de los Acuerdos de Abraham —que normalizaron las relaciones entre Israel y naciones árabes en 2020— hacia el hemisferio occidental, con Argentina como principal impulsor y México como próximo objetivo estratégico.

El origen inmediato de los Acuerdos de Isaac se remonta a 2025, cuando el presidente argentino Javier Milei se convirtió en el primer jefe de Estado no judío en recibir el Premio Génesis — conocido como el «Nobel judío»— con una dotación de un millón de dólares. Milei destinó íntegramente este premio a la creación de la organización American Friends of Isaac Accords, con sede en Nueva York, cuyo objetivo declarado es «fortalecer los lazos diplomáticos, económicos y culturales entre Israel y América Latina». El nombre «Isaac» no es casual: en la tradición bíblica, Isaac es el único patriarca que nunca abandonó la Tierra de Israel, una elección que subraya la dimensión territorial y estratégica del proyecto.

El avance de la ultraderecha en América Latina constituye el caldo de cultivo para esta estrategia. Gobiernos alineados con Israel en Argentina, El Salvador, Ecuador y Guatemala han facilitado marcos legales que priorizan la inversión extranjera sobre la soberanía de los recursos. Esta alianza no es casual: responde a una coordinación política que trasciende fronteras y que ha encontrado en los Acuerdos de Isaac su expresión institucional más acabada. La conexión entre estos gobiernos y el proyecto sionista internacional se ha vuelto explícita en múltiples foros, donde han manifestado su apoyo incondicional a Israel y su compromiso con la agenda de los Acuerdos de Isaac.

Un caso emblemático de esta injerencia es Honduras. La liberación de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño condenado por narcotráfico y vínculos con el crimen organizado, ha sido impulsada por grupos con conexiones israelíes que operan en la región. El denominado «Honduras Gate» documenta cómo redes de poder transnacionales han influido en el sistema de justicia hondureño para beneficiar a actores políticos alineados con los intereses del sionismo internacional y la ultraderecha regional. Este entramado evidencia que la estrategia de control de recursos no se limita al ámbito económico, sino que se extiende a la manipulación de los sistemas políticos y judiciales.

La injerencia israelí en procesos electorales ha sido denunciada por el presidente colombiano Gustavo Petro. Tras las elecciones presidenciales de junio de 2026, Petro denunció que el sistema electoral colombiano había sido manipulado desde el exterior para favorecer al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo una victoria ajustada sobre el candidato oficialista Iván Cepeda. Petro afirmó haber detectado alteraciones en las direcciones IP de los servidores del Registro Nacional, lo que, según él, evidencia que el software de conteo de votos fue comprometido y que «la única entidad en el mundo capaz de hacer eso es el Estado de Israel». Señaló además a la empresa israelí de inteligencia cibernética BlackCore,

acusándola de desplegar 500 mil bots para manipular la percepción pública y difundir desinformación durante la campaña. La firma Thomas Greg & Sons, encargada de la logística electoral y dirigida por los hermanos Bautista, también fue señalada por Petro como parte de este entramado. Netanyahu celebró públicamente la victoria de De la Espriella, enmarcándola como parte de la expansión de los Acuerdos de Isaac y afirmando que «los amigos de Israel siguen ganando». De la Espriella, quien se ha comprometido a restablecer relaciones diplomáticas con Israel y trasladar la embajada colombiana a Jerusalén, representa la continuidad del alineamiento de la ultraderecha latinoamericana con los intereses israelíes.

La clave de esta arquitectura es la calificación crediticia Triple-A del Banco Interamericano de Desarrollo. Smotrich fue explícito sobre el mecanismo: «La inversión se hará a través del banco, con todas las ventajas del banco», refiriéndose a la calificación Triple-A del BID que convierte el capital israelí en inversión de «riesgo mínimo». El funcionamiento del fondo prevé dos vías: una ventanilla gubernamental respaldada por el Estado de Israel y una ventanilla privada con capital de inversores institucionales israelíes. El objetivo declarado es canalizar los más de 2 billones de dólares en ahorros institucionales de Israel hacia América Latina y África.

El «paquete tecnológico» israelí —integrado por Mekorot (agua), Netafim (riego) y ADAMA (agroquímicos)— no se despliega en el vacío. Se apoya en una red de tratados de libre comercio que funcionan como andamiaje legal. El TLC México-Israel de 2000 fue el primero y ha servido como modelo. México se perfila como el próximo objetivo estratégico de los Acuerdos de Isaac, con la organización American Friends of Isaac Accords identificando a México y Brasil como prioridades porque «se proyecta que estén entre las diez economías más grandes del mundo en una generación». El TLC Israel-Mercosur de 2009 cubre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mientras que el TLC Israel-Guatemala de 2024 incluye acceso libre de aranceles a agroquímicos y un capítulo de cooperación en gestión del agua y energías renovables. El Acuerdo UE-Mercosur, que será firmado en Asunción, Paraguay, en 2026, constituye un engranaje fundamental, conectando el capital europeo con el israelí en la explotación de recursos estratégicos.

En el centro del modelo se encuentra un triángulo corporativo israelí. Mekorot, empresa estatal de gestión hídrica, Netafim, líder mundial en riego por goteo propiedad del conglomerado Orbia, y ADAMA, gigante de agroquímicos propiedad de ICL Group, operan como un paquete integrado e inseparable. Lo que no se ha dicho con la profundidad necesaria es el nexo financiero que conecta todo el ecosistema: BlackRock y Vanguard son accionistas mayoritarios tanto de ICL Group como de Orbia. BlackRock posee aproximadamente el 14.77 por ciento de ICL Group y el 2.98 por ciento de Orbia; Vanguard, el 6.79 por ciento y el 1.86 por ciento respectivamente.

Un elemento central de esta estructura es la composición de capital de Orbia, el conglomerado propietario de Netafim. Orbia es una empresa con capital mexicano-israelí, y su principal accionista es la familia Del Valle, uno de los grupos empresariales más influyentes de México. La familia Del Valle, a través de diversos vehículos de inversión, ha mantenido una participación significativa en Orbia desde sus orígenes como Mexichem. El control de Orbia por parte de esta familia mexicana es relevante porque sitúa a México no solo como mercado receptor del «paquete tecnológico» israelí, sino como parte activa de la cadena de despojo a través de su capital. La influencia de la familia Del Valle en la economía mexicana es considerable: además de Orbia, el grupo tiene participaciones en sectores estratégicos como la infraestructura, la construcción y la energía. Su capacidad de influencia política en México, derivada de su poder económico y sus conexiones con las élites del país, convierte a Orbia en un actor con capacidad de moldear las políticas públicas relacionadas con el agua, la agricultura y el territorio. Esta conexión explica por qué México, a pesar de su histórica resistencia a la privatización del agua, ha mantenido acuerdos de cooperación técnica con empresas israelíes y por qué la expansión de los Acuerdos de Isaac en el país encuentra facilidades que no existen en otras naciones de la región.

El informe del Relator Especial de la ONU Francesca Albanese ha identificado a BlackRock y Vanguard como los principales inversores detrás de empresas cómplices del genocidio en Gaza. El informe señala que el genocidio continúa «porque es lucrativo para muchos».

El modelo de Mekorot en Palestina es el laboratorio original de esta estrategia. La empresa estatal israelí controla más del 80 por ciento del suministro de agua en los territorios ocupados, donde la población palestina sobrevive con un promedio de 70 litros por persona al día —frente a los 300 litros de los colonos israelíes— y en algunas comunidades la cifra se reduce a apenas 20 litros, muy por debajo de los 100 litros mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En Gaza, la situación es aún más crítica: entre 2024, el acceso se redujo a entre 2 y 9 litros por persona al día. La ONU ha documentado que las autoridades israelíes tratan a los 450 mil colonos y a los 2.7 millones de palestinos en Cisjordania bajo dos cuerpos legales distintos, resultando en un trato desigual en el acceso al agua.

El modelo se despliega simultáneamente en varios países de América Latina. En Argentina, XtraLit firmó con YPF para la extracción de litio en Salta, Catamarca y Jujuy; Tamar Mining obtuvo permisos para explorar diez mil hectáreas en el Alto Río Chubut; y el gobierno de Milei privatizó el 90 por ciento de Agua y Saneamientos Argentinos, abriendo la puerta a Mekorot. En Chile, Windin Capital Fund, fondo israelí creado en 2020, financió el Parque Eólico Cancura en La Araucanía, territorio mapuche, con una inversión de 34 millones de dólares. En Guatemala, el TLC con Israel y el acuerdo de Mekorot con la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán en 2023 representan la implementación directa del modelo.

México ocupa una posición central por el T-MEC, sus reservas de litio en Sonora y la crisis hídrica profunda que convierte al «paquete tecnológico» israelí en una «solución» aparentemente atractiva. Mekorot mantiene desde 2013 acuerdos de cooperación técnica con la Comisión Nacional del Agua para la rehabilitación de acuíferos como Cuautitlán-Pachuca, la gestión hídrica en Iztapalapa y proyectos de recarga artificial en Sonora y la Comarca Lagunera. La preocupación en México no es solo la presencia de Mekorot, sino la falta de transparencia en los contratos, el control de datos hidrogeológicos sensibles por parte de una empresa extranjera y la priorización del agua para la agroexportación por encima del consumo humano y las necesidades de las comunidades rurales.

A diferencia de América Latina, África no cuenta con un banco de desarrollo regional con calificación Triple-A. Israel utiliza en su lugar la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, MASHAV, fundada en 1958, activa en 140 países, que ha capacitado a más de 350 mil personas en seguridad alimentaria, gestión de recursos hídricos y desarrollo rural. Mekorot tiene acuerdos en Uganda (once presas y embalses), Kenia y Marruecos; Netafim opera en Ruanda (Gabiro Agribusiness Hub, 15 mil 600 hectáreas), Senegal y Etiopía. La participación israelí en el Gran Represa del Renacimiento Etíope es particularmente significativa: el 85 por ciento de los recursos hídricos del Nilo provienen de las tierras altas de Etiopía, lo que convierte a Israel en un actor clave en la geopolítica del recurso hídrico más estratégico del continente.

Israel no solo exporta tecnología de agua. La energía renovable y los minerales críticos constituyen el nuevo vector estratégico de acumulación de capital. China controla actualmente el 85-98 por ciento de la industria de tierras raras y el 65 por ciento del procesamiento de litio, creando una vulnerabilidad estratégica para Estados Unidos, Europa e Israel. En este contexto, Israel busca posicionarse como socio tecnológico en el procesamiento y refinamiento de minerales críticos. El agua no es solo el fin del modelo de despojo, sino también el medio necesario para su funcionamiento: la extracción de minerales críticos requiere cantidades masivas de agua; la energía necesaria para extraer y procesar esos minerales requiere aún más agua. Israel necesita aproximadamente 2 mil 700 millones de toneladas de minerales críticos para implementar su plan energético 2050. El control del agua en Abya Yala y África se convierte así en la condición de posibilidad para el control de los minerales que alimentan la transición energética global.

La incongruencia fundamental de esta arquitectura es que organismos como el BID, que tienen mandatos de desarrollo social y protección de derechos humanos, están facilitando la entrada de capital israelí a la región, ignorando que Mekorot opera un sistema de apartheid del agua en Palestina, documentado por la ONU como crimen de lesa humanidad; que BlackRock y Vanguard, al ser accionistas de ICL Group y Orbia, se benefician de este modelo; y que el TLC Israel-Guatemala se firmó y entró en vigor mientras Israel intensificaba su ofensiva en Gaza. El

BID, presidido por Ilan Goldfajn, no ha emitido declaraciones sobre las implicaciones en derechos humanos de los Acuerdos de Isaac.

Frente a esta estrategia, los movimientos sociales cuentan con herramientas jurídicas y políticas para resistir. En el ámbito del derecho internacional, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional clasifica el apartheid como crimen de lesa humanidad, y la participación activa de Mekorot en este sistema coloca a la empresa en clara violación del derecho internacional, convirtiéndola en un objetivo legítimo para campañas que exigen rendición de cuentas corporativa. En Chile, la Agrupación de Abogados por Palestina ha presentado denuncias ante la Contraloría argumentando que el convenio con Mekorot implica la administración de fondos públicos para financiar el apartheid del agua, y ha señalado que el contrato contiene cláusulas que renuncian a la jurisdicción nacional, obligan a las partes a regirse por arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y aplican la ley de Inglaterra, dejando al patrimonio fiscal en estado de indefensión. Estas mismas herramientas pueden ser utilizadas por defensores del agua en México, Argentina y Guatemala para impugnar contratos opacos que vulneran la soberanía nacional.

Las resistencias en Xochimilco, la defensa del agua en Mendoza, la lucha contra la minería en el Alto Río Chubut, la defensa del Nilo en Etiopía y el boicot de Netafim en India son frentes de una misma batalla contra la financiarización de la vida y el acaparamiento de los bienes comunes. El capital global ha comprendido que todas estas luchas son una misma y actúa en consecuencia. Los movimientos sociales del Sur Global enfrentan el desafío de articular una respuesta transcontinental a esta estrategia de despojo que no distingue fronteras, utilizando el derecho internacional y la solidaridad entre pueblos para defender la vida, la soberanía y la dignidad frente a un colonialismo que se presenta bajo el manto de la «innovación tecnológica» y el «desarrollo sostenible».

Fuentes documentadas: i24NEWS (entrevista a Bezalel Smotrich, 1/6/2026); ONU (Informe del Relator Especial Francesca Albanese, 2025; Informe del Alto Comisionado sobre asignación de recursos hídricos en territorio palestino ocupado, 2021); The Jerusalem Post (lanzamiento de American Friends of the Isaac Accords, 11/8/2025); Ministerio de Economía de Guatemala (perfil del TLC Israel-Guatemala, 2024); Ámbito («El agua definirá el éxito del Acuerdo Mercosur-UE», 2026); Investing.com (datos de propiedad accionaria); Ministerio de Energía de Israel (informe estratégico sobre minerales críticos, junio 2025); Al-Haq («Water For One People Only»); Friends of the Earth International (informe sobre Mekorot y el apartheid del agua, 2026); Business & Human Rights Resource Centre (acuerdo Mekorot-GORE Biobío en Chile); OLCA (denuncia de abogados chilenos por Palestina ante Contraloría); Al Jazeera y The New Arab (cobertura de las denuncias de Petro sobre injerencia israelí en elecciones de Colombia,

junio 2026); Cubadebate y Enlace Judío (cobertura de la Cumbre de los Acuerdos de Isaac en Buenos Aires, 2026).